

Levantamiento popular del 12 y 13 de febrero en La Paz

Bolivia arrinconada en la azotea de su historia

**Por Claudia Espinoza*
y Gonzalo Gozalvez****

* *Investigadora
del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral
y Agrario (CEDLA)
La Paz, Bolivia*

** *Integrante
del Colectivo
AsíEs Bolivia*

Era jueves por la tarde, el 13 de febrero. A cinco cuerdas de la plaza Murillo, donde se encuentra el centro del poder constituido, gritos de desesperación e indignación se escuchaban en el puente de San Francisco porque los disparos de los militares apostados en la calle Comercio habían dejado inmóvil el cuerpo de un trabajador que recogía sus herramientas en la azotea del edificio de AGFA. Nadie podía subir a verificar si estaba todavía con vida; llegó una ambulancia y entraron al edificio una doctora y una enfermera de la Cruz Roja.

A pocos minutos se notaba mayor angustia en los gritos de la multitud, pues los disparos del ejército habían herido de muerte a la enfermera y dejaron gravemente herida a la doctora. Pero esta vez era más difícil todavía entrar a rescatarlas al edificio porque los uniformados disparaban a todo lo que se movía. La desesperación de poder hacer poco o nada hacía que la gente gritara con más ira a los militares.

La multitud –en su mayoría jóvenes varones y mujeres desocupadas de 13 a 18 años, familias congregadas en la protesta, estudiantes, adultos desocupados, trabajadores por cuenta propia, y en menor medida trabajadores de sectores organizados– realizó una vez más un cabildo espontáneo en la calle para reafirmar su indignación colectiva frente a la incapacidad del gobierno de dar solución a ese conflicto social, y para condenar la violencia. La lucha se reafirmaba en los gritos y en el acercamiento hasta una cuadra de distancia a los uniformados para tirarles piedras, cayendo heridos o muertos al ser alcanzados por balas de guerra en ese desigual intercambio.

Continuó la gente protestando varias horas; no eran enfrentamientos pues los muertos y heridos estaban sólo del lado del pueblo “armado” con piedras y palabras. Del otro lado, los tanques rodeaban la plaza Murillo, los militares apostados a sus costados disparaban a matar sin respetar a la prensa y ni siquiera a la Cruz Roja. No había ni un solo movimiento social ni partido político liderando la protesta; incluso quizás tampoco había un objetivo explícito en la multitud. ¿Cuál era entonces la fuerza que empujaba a la gente a arriesgar sus vidas en tales condiciones?

Del impuestazo a la ira

Dos días antes, el martes 11 de febrero, el gobierno había decretado el llamado impuestazo como medida para reducir el déficit fiscal, que consistía en un impuesto de 12,5% sobre los ingresos de las personas a partir de los dos sueldos mínimos (880 bs., equivalentes a 115 u\$s). Esa medida provocó un motín de las bases policiales que veían afectados sus salarios. Esa misma noche la protesta se concentró en el Grupo Especial de Seguridad (GES) a una cuadra del Palacio de Gobierno. La mañana del miércoles 12 se realizaron varios intentos de diálogo entre los amotinados y el gobierno, pero la política de la fuerza basada en la autoridad sólo tensionó aún más la situación.

Ante los intentos fallidos, una marcha de policías vestidos de civil llegó frente al Palacio. Minutos después, colegiales de 12 a 14 años del Colegio Fiscal Ayacucho tomaron las calles con otra marcha, por demandas estudiantiles, pero no tardaron en unir las protestas, como aseguraron en ese momento sus dirigentes. Cuando los pocos policías militares (PM) que custodiaban el Palacio los atacaron con gases, los estudiantes reaccionaron con cánticos y devolviendo las mismas granadas de gas; así hicieron retroceder a la guardia y entraron a la plaza Murillo para tirar piedras contra el Palacio, expresando su repudio al gobierno.

Fue entonces cuando la PM salió nuevamente del Palacio de Gobierno disparando gases, e inmediatamente los policías amotinados comenzaron a responder con otro arse-

“...había miles de personas que efectivamente arriesgaban sus vidas por gritar la injusticia (...) por exigir un fin a los atropellos del gobierno y una mayor y más sustantiva participación en la vida política del país.”

nal de lo mismo. Los dos bandos querían defender sus posiciones. Así empezó la agresión armada entre militares y policías, que dejó como consecuencia varios muertos: policías, conscriptos del ejército y también civiles.

La noticia del fuego cruzado corrió por toda la ciudad: la plaza Murillo, centro histórico de La Paz, era un campo de guerra. La gente acudía a las inmediaciones a protestar contra el impuestazo y contra el gobierno, que por su parte –en pocas horas– había desaparecido.

De los enfrentamientos de la plaza, la protesta se volcó a la quema de instituciones-símbolo del Estado, como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Paralelamente, el repudio alcanzó las sedes de los partidos políticos que han gobernado Bolivia alternadamente en los últimos quince años: MNR, MIR, UCS y ADN¹, y sedes de algunas empresas emblemáticas de las privatizaciones y transnacionalización de la economía.

Ese día, si bien el motín policial marcó el inicio de la protesta, los enfrentamientos terminaron por desatar una ira popular generalizada y contenida de mucho tiempo por los insultos cotidianos de los gobernantes de turno a la dignidad e inteligencia de la gente, por el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos y ahora la reducción de los salarios.

Esa combinación de ira y necesidad del pueblo tomó el rumbo de los saqueos a grandes tiendas comerciales y luego también a pequeños negocios, que se extendieron a lo largo de toda la noche. Muchos barrios de comerciantes “mayoristas y minoristas” organizaron grupos de seguridad para impedir los saqueos a sus tiendas.

Para el jueves 13 de febrero por la mañana, entre el olor a cenizas, los escombros y la incertidumbre, la Central Obrera Boliviana había convocado a una marcha. Sin embargo, antes de empezarla el ejército disparó gases, mientras los

helicópteros de la Fuerza Área rondaban altos edificios. El miedo y la inseguridad hicieron que la mayor parte de los trabajadores sindicalizados se retirara y quedara la gente más rebelde protestando contra tanques y munición de guerra.

En la ciudad de El Alto, la gente quemó también instituciones gubernamentales además de empresas que atentan contra la economía familiar, como las transnacionales Aguas del Illimani, Electropaz, financieras de crédito y otras. La participación de la población fue mucho más generalizada que en la ciudad de La Paz, y más organizada: incluso expulsaron a los medios de comunicación.

Mientras eso sucedía, la Policía ya había llegado a un acuerdo con el gobierno, pero no podía salir a cumplir su función de seguridad pública pues los ánimos de la gente estaban muy irritados, haciendo imposible detener las protestas y también los saqueos.

La protesta social fue estigmatizada por los medios de comunicación como saqueos y por tanto “actos vandálicos”. Sin embargo, había miles de personas que efectivamente arriesgaban sus vidas por gritar la injusticia, por decir que ellos también quieren deliberar y decidir sobre los problemas, en fin, por exigir un fin a los atropellos del gobierno y una mayor y más sustantiva participación en la vida política del país.

En medio de la masacre, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, obligado por la situación que había provocado, tuvo que aparecer públicamente con los representantes de ambas instituciones, policial y militar, para anunciar la anulación del impuestazo.

El resultado de la violencia fueron treinta y tres muertos y más de doscientos heridos, según organizaciones de derechos humanos. A dos meses de los acontecimientos, los familiares, ya organizados, siguen mendigando unas cuantas medicinas para los heridos, y ni hablar de las indemnizaciones a los civiles, porque están lejos de cumplirse.

Amenazas de fuerza autoritaria

Y todavía más lejos está la justicia. Ni la Policía ni las FFAA. pretenden coadyuvar al proceso judicial abierto para identificar a los responsables de la “masacre de febrero” aunque existan pruebas materiales, documentales y testigos que confirman la presencia de francotiradores. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia presentó incluso un video y fotografías que dan cuenta de lo sucedido.

El Estado, a través del Ministerio Público, no da señales de esclarecimiento. Encubre la impunidad porque no sólo perdió legitimidad ante el pueblo (por medio de un pacto

partidario, Sánchez de Lozada llegó a la presidencia con un pírrico 22% del voto) sino –y esto es lo peligroso– ante las dos fuerzas coercitivas estatales.

El monopolio de la fuerza pública estuvo a merced de los uniformados sin ningún control civil ni responsabilidad política. Mientras la Policía se amotinaba, las FFAA. chantajeaban al poder político. Por otra parte, quedaron claras la ausencia de un mando único de los uniformados y la incapacidad del gobierno: el Presidente y varios de sus ministros se asilaron en el Cuartel General del Ejército, donde transaron la salida violenta al conflicto. Fuentes extraoficiales militares cuentan cómo minuto a minuto sentían un envalentonamiento al percibir que efectivamente la “estabilidad de la democracia estaba en sus manos” (y en sus armas).

La transacción que dio paso al uso de la violencia incluyó un aumento salarial igual al otorgado a los policías y anexó un tema de vital importancia nacional: la exportación de gas natural a EE.UU. Elementos de las FFAA. han rechazado el negocio vía Chile, y así se lo han hecho saber al Presidente.

De manera que el gobierno “gobernó sobre bayonetas”, como señalaron varios analistas, abriendo un profundo abismo entre poder civil y poder militar. Los militares deliberaron más que en cualquier otro momento crítico en estas últimas dos décadas de democracia representativa en Bolivia. Juan Ramón Quintana, experto en temas de seguridad nacional, identifica dos actores en los sucesos de febrero: la Policía sediciosa y las FFAA., cumpliendo un mandato constitucional, puesto que reprimieron por orden del Capitán General de las FFAA., el Presidente.

Sin embargo, el 12 y 13 sólo fueron la muestra de la punta del iceberg que arrastra una crisis añeja. Comenta Quintana²: “los gobiernos tienen una enorme desconfianza en su capacidad coercitiva. Usan hace años indistintamente a Policía y FFAA. para reprimir porque no cuentan con capacidad disuasiva de las instituciones democráticas. No tienen confianza política ni operativa, por eso utilizan los recursos de los ‘gastos reservados’ (fondos públicos exentos de fiscalización pública) para compensar económicamente esa desconfianza política”. De este modo, advierte Quintana, ambas instituciones de la fuerza se sostienen con fondos grises para “cubrir” un profundo desgaste en su relación con el sistema político.

De ahí surge una preocupación profunda. De hecho, los militares creen que “salvaron la democracia”, mientras varias corrientes internas interpretan eso a su modo: chavistas, constitucionalistas y “golpistas” confluyen incubando sus propios planes e intereses. El rumor de un golpe autoritario al mando de uno de los partidos de oposición (Nueva Fuerza Republicana) o de un autogolpe liderado por el propio gobierno, es comida diaria en los cuarteles. Oficiales de rango medio confirman no sólo un porcentaje de acuartelamiento sino hasta de entrenamiento especial.

Quintana considera que las instituciones del orden están cobrando una factura al sistema político debido a un sistema de corrupción que éste ha creado en los altos mandos en largos veinte años de democracia. En esto, la Embajada de EE.UU. ha jugado un rol divisionista al trastocar funciones de los aparatos coercitivos y al introducir la competencia económica: se han creado la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y contra el Terrorismo, y el Grupo de Acción Inmediata –como parte de la Policía–, y se ha llevado a los militares a reprimir los conflictos sociales.

La protesta tiró por tierra los planes del FMI

Todavía persiste la incertidumbre sobre qué camino tomarán las instituciones del orden, y éste dependerá de cómo el gobierno quiera resolver la crisis económica. Al cabo de más de diecisiete años de fiel aplicación de las recetas del FMI y el Banco Mundial, el Estado boliviano está sumido en una crisis estructural sin precedentes. Habiendo privatizado las empresas que sostenían el Estado –principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)– sufre una crisis fiscal crónica, que busca cubrir con ciclos acelerados de condonaciones de deudas antiguas, contrataciones de deudas nuevas y cambios tributarios para “ampliar” el universo de contribuyentes.



© Clara Algranati

El gobierno requería 3.900 millones de dólares para aplicar su anunciado plan de “Obras con Empleo”, condicionado por el FMI a una reducción del 3% en el déficit fiscal, es decir, del 8,6 al 5,6% respecto del Producto Interno Bruto. En 1999 el FMI ya había sugerido varias medidas para evitar el colapso fiscal: una modificación del sistema tributario boliviano; la anulación del impuesto en cascada IT (Impuesto a las Transacciones) que se compensaría con un incremento del Impuesto al Valor Agregado del 13 al 15%; la incorporación al sistema tributario de los regímenes especiales como el de transporte, el simplificado y el régimen agrícola unificado; y además, la sustitución del actual impuesto de Régimen Complementario (RC-IVA) por un impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, “ya es tiempo de que Bolivia considere un cabal impuesto sobre la renta personal (IRP) con una base

amplia". El gobierno boliviano considera que las posibles soluciones a su crisis fiscal son dos: el "gasolinazo", o el "impuestazo". La modificación del sistema tributario se plantea como objetivo reducir la dependencia de los ingresos fiscales del sector de hidrocarburos y reducir la presión sobre la inversión privada de las empresas, aunque ambas cosas ya se han empezado a realizar sin aplicar modificaciones. Señala el FMI: "es posible concluir que Bolivia ha hecho un gran esfuerzo de diversificación de fuentes tributarias al reducir la dependencia del sector petrolero, sustituyéndola con más esfuerzo tributario del resto de la economía".

Fuera de consideración está la reestructuración de las relaciones con las empresas transnacionales en el país, que hoy por hoy controlan más del 65% de la inversión en Bolivia y que desde los programas de privatización que les abrieron las puertas en los '90, han exportado más capital de lo que han invertido. En ese sentido, la concepción del FMI significa que para flexibilizar la economía hacia los posibles inversores –transnacionales que operan en hidrocarburos y en menor medida otras empresas– se debe cargar toda la presión tributaria sobre el pueblo a través de impuestos a sus ingresos, a la economía informal, al transporte y a los agricultores. Es decir, que se deben incrementar los ingresos del Tesoro General de la Nación con impuestos a las personas sencillas.

Lógicamente, el gobierno "optó" por la "sugerencia" del FMI, el "impuestazo", yendo inclusive más allá: la exención propuesta para cuatro salarios mínimos vitales fue reducida por el gobierno a sólo dos, ampliando aún más la base tributaria que proponía el FMI. Pero esta "base amplia", o "el resto de la economía" al que alude el FMI, está consciente de su esfuerzo, y por eso no tardó en responder al impuestazo.

La crisis estatal y el norte político

Los elementos citados muestran una dinámica nacional imposible de sostener por mucho tiempo. A este gobierno le ha tocado la profundización de una crisis estatal política, económica y social que afloró en abril de 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba y en el Altiplano paceño con la irrupción aymara, y que ahora encarna quizás su fase terminal. La "crisis del modelo" es tema de conversación cotidiana y sentido común. Pero, como lo manifiesta el analista Álvaro García Linera (2003), si bien se está frente a una necesaria transición del Estado y la economía, el contenido y posible proceso de esta transición están lejos de resolverse.

Por un lado, las fuerzas de dominación ingresaron a un estado de inercia con amenazas de salidas autoritarias. Pocas semanas después de los eventos de febrero, el presidente Sánchez de Lozada anunció que la peculiar gobernancia neoliberal ("democracia") que preside se defendería con las armas. Por otro lado, los movimientos sociales expresan

un debilitamiento, producto de años de políticas que han flexibilizado sus centros de trabajo, han hecho casi inexistentes los servicios públicos y han socavado sus bases organizativas. Si bien algunos dirigentes de los movimientos sociales cosecharon en las elecciones de 2002 una representación sin precedentes en el Parlamento, la apuesta electoral no ha producido resultados ni copado las expectativas populares, por razones estructurales y burocráticas y por falta de visión política.

Así las cosas, han aflorado propuestas varias para sellar un nuevo "pacto social". Por limitarse a buscar consenso sobre las orientaciones existentes en el gobierno, la propuesta de la Iglesia Católica efectivamente nació muerta, ya que no incorporó temas medulares que emergen de las organizaciones sociales (tierra, defensa de la hoja de coca, trabajo, participación en las decisiones sobre el destino de las riquezas nacionales como el gas, el ALCA y otras). Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentó organizar una Cumbre Social facilitando el acercamiento entre partidos políticos, Estado y organizaciones sociales, pero fracasó.

En lugar de un pacto o cumbre, un pequeño germen de unificación de los movimientos sociales (nacido en enero durante los bloqueos de caminos de los cocaleros) llamado Estado Mayor del Pueblo lanzó una convocatoria a un Encuentro Nacional de los Movimientos Sociales para los próximos meses, donde se pretende discutir una agenda nacional en la que no se fusionen y confundan las diferencias, sino donde cada sector construya un plan propio en coordinación con los demás. Si bien recoge y plantea claramente el sentido y contenido de las demandas populares, queda por verse si tendrá la capacidad de coadyuvar al proceso deliberativo y resolutorio que propone. La consigna es "democratizar el país".

Bolivia vive un momento muy peligroso. La democracia neoliberal ha cobrado ya impunemente docenas de vidas por encasillarse en las recetas del FMI y los mandatos de la guerra antidrogas de EE.UU. Retornan dudas sobre el sometimiento de las fuerzas represivas al poder civil, mientras la Embajada de EE.UU., persiguiendo sus intereses, juega y manipula peligrosamente estructuras estatales y entornos políticos.

Bibliografía

García Linera, Álvaro 2003 *Pulso* (La Paz) N° 190, 28 de marzo al 3 de abril.

Notas

1 N de la E: MNR - Movimiento Nacionalista Revolucionario; MIR - Movimiento de Izquierda Revolucionario; UCS - Unión Cívica Solidaridad; ADN - Acción Democrática Nacionalista.

2 Entrevista al sociólogo y analista sobre temas de seguridad nacional Juan Ramón Quintana, realizada el febrero de 2003.